

que en él las autoridades no tienen derecho de presentar pruebas, sino solo el de informar con justificación. Considerando: que la prueba presentada por Bustamante está fundada en el dicho de tres testigos, mayores de toda excepción, los que han declarado que es casado, que tiene una hija pequeña, y que es hijo único de María Felipa, viuda y anciana de sesenta años, y además tiene una hermana soltera; que de todas estas personas es el único sosten con su personal trabajo. Considerando: que dando por ciertos los hechos anteriores, el quejoso debe considerarse comprendido en el goce de la garantía invocada por él; he tenido á bien declarar y declaro: que la Justicia Federal ampara y protege á Trinidad Bustamante, contra el O. Ayudante municipal de Tejalpa, que al haberlo consignado contra su voluntad al servicio de las armas, ha infringido en su perjuicio la garantía consignada en el art. 5º del Pacto Federal de 1857. Lo decretó y firmó el O. juez de Distrito del Estado de Morelos, por ante mí.—Doy fé.—Zenon J. de Velasco.—Una rúbrica.—José Anastasio Rego, secretario.—Una rúbrica.”

Son copias que certifico. Cuernavaca, Noviembre 20 de 1872.—José Anastasio Rego, secretario.

#### EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Diciembre 9 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Morelos por Trinidad Bustamante contra el Ayudante municipal de Tejalpa que lo remitió de reemplazo para servir en el ejército; y considerando: que en el expediente aparece que Bustamante es casado, tiene hijo, madre anciana y una hermana menor á quien mantiene, y que contra su voluntad se le retiene en el servicio mi-

litar; y por lo mismo que se vulnera en su persona la garantía á que se refiere el art. 5º de la Constitución Federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio, el 14 del próximo pasado, por el juez de Distrito de Morelos, que declara que la Justicia Federal ampara y protege al O. Francisco Bustamante contra el acto por el cual se le ha destinado al servicio de las armas.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CO. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—Ignacio Ramírez.—J. M. del Castillo Velasco.—M. Auza.—S. Guzman.—Luis Velazquez.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 11 de 1873.—Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el reo Juan Ramírez y socios, contra el O. Gefe político de Villa Alvarez que los condenó á la última pena.

#### PEDIMENTO DEL O. PROMOTOR FISCAL.

O. juez de Distrito:

El Promotor Fiscal dice: que ha visto con atención y examinado detenidamente la solicitud de amparo hecha por Juan Ramírez y socios, contra la disposición del O. Gefe político de Villa Alvarez, mandando aplicarles la pena de muerte por el delito de robo en la casa de Nico-

lías Mendez, sita en la hacienda de Mejía.

Del exámen hecho de la solicitud referida, resulta evidenciado que los promovedores fueron sentenciados á la pena de muerte en virtud de lo dispuesto por la ley de 23 de Mayo último, relativa á salteadores y plagiarios, contra cuya ley piden también amparo los quejosos, fundándose en que con la aplicación de ella se viola en sus personas la garantía que otorga el art. 23 de la Constitución Federal, que dispone la abolición de la pena de muerte, mandando expresamente que solo se aplique, entretanto se establece el régimen penitenciario, al traidor á la patria en guerra extranjera, al salteador de camino, etc., en las cuales no comprendo al salteador en poblado, como lo fueron los peticionarios. Estos alegan también, que si bien es cierto que la misma Constitución Federal permite en su art. 29 la suspensión de las garantías que ella asegura, lo hace estableciendo expresamente la excepción de las que se refieren á la vida del hombre; por lo cual la ley de 23 de Mayo citada que quebranta esta disposición, es anticonstitucional y que por lo mismo no debe aplicarse.

No cabe duda, O. juez, en que nuestro Pacto fundamental hace tal prevención en su art. 29, en virtud de la cual es necesariamente anticonstitucional toda ley contraria á ella, como lo es la de 23 de Mayo que nos ocupa. Si la Constitución general determina en el art. 23 los casos en que puede aplicarse la pena de muerte, y dispone que fuera de ellos no debe imponerse, y si en el art. 29 citado ordena que no se suspendan las garantías que se refieren á la vida del hombre, claro es que la ley de 23 de Mayo que impone la pena de muerte en casos en que lo prohíbe la Constitución, y que por consiguiente ataca garantías que se refieren á la vida del hombre, es anticon-

titucional sin contradicción ninguna. El congreso que la expidió pudo declarar suspensas todas las garantías que otorga la ley magna, menos las que se refieren á la vida, y obrando así no podía decirse anticonstitucional la ley que expidiese, por mas cruel y tiránica que pareciera: decretar la pena de muerte contra lo dispuesto por la Constitución, no estuvo en sus facultades, como nunca pudo estarlo la abolición completa de la misma Constitución general. Esto es evidente. Los congresos generales existen por disposición de esta ley Suprema, las facultades de que se hayan investidos se derivan de la misma, no pueden ser otras mas que las que ella les delega, fuera de las cuales sus actos no tienen validez, supuesto que en tal caso no proceden dichos actos de ningún poder legal.

Si la Constitución, pues, dispone en el art. 126 que ella y las leyes que emanan de la misma, serán la ley Suprema de la Unión, y si esta ley Suprema ordena que, fuera de los casos en que ella lo permite, no se aplique la pena de muerte; haciendo mas enérgica esta disposición, cuando declara que en el naufragio mismo de las garantías que ella consiente queden en vigor, salvas é inviolables las que aseguran contra dicha pena. ¿Como un congreso que no puede obrar sino con arreglo á la soberana ley que lo ha creado y por cuya sola virtud tiene existencia ha podido dictar un decreto atentatorio á dicha ley soberana?

Es inconcuso, por tanto, que la ley de 23 de Mayo es netamente anticonstitucional. Ahora bien: visto que es contraria á la Constitución general la ley de 23 de Mayo, falta solo demostrar que por esta razón no ha podido aplicar dicha ley el Jefe político de Villa Álvarez, así como ninguna otra autoridad de la República, lo cual siendo evidente, es de estricta justicia conceder á los promovedores Ramirez y socios el amparo que

solicitan contra la disposicion del Gefe de Villa Alvarez y contra la ley de 23 de Mayo tantas veces mencionada.

En conflicto una y otra ley, es indispensable que llegado el caso, se aplique una de ellas con desprecio de la otra, que la una se declare vigente y la otra derogada ó insubsistente: en una palabra, que la una sea la ley y la otra no. Así es que tenemos frente la una de la otra y en lucha abierta la Constitucion general de la República y la ley de 23 de Mayo dictada por un congreso *constitucional* ¡qué sarcasmo! sin los requisitos que previene el art. 127 de la Constitucion, supuesto que al expedirla no ha sido por el voto de las dos terceras partes de los individuos del congreso de la Union presentes, y la aprobacion de la mayoría de las legislaturas de los Estados, y los demas requisitos dichos.

Veamos ya si la Constitucion debe preferirse ó no á una ley, su contraria, como la de 23 de Mayo.

Ningunas razones mejores pudiera alegar el suscrito Promotor en defensa de la Suprema ley de la nacion, que las que se encuentran en el informe pronunciado ante la 1ª Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nacion por el licenciado D. Ignacio Luis Vallarta en el juicio seguido contra D. Antonio Lozano sobre secuestro de todos sus bienes, conforme á la ley de 31 de Enero de 1870; ley anticonstitucional como la de 23 de Mayo de que tratamos. Este informe se publicó en el número 20 del tomo 5º del "Derecho."

"Me es forzoso probar, dice el Sr. Vallarta, que en este caso que cae bajo el dominio del derecho constitucional, no es una máxima sino un error este: *"Juxta non de legibus sed secundum leges judicare debet;"* que aquí el juez debe juzgar de la ley secundaria para el efecto de calificar su inconstitucionalidad, á fin de juzgar siempre segun la Constitu-

Tome III.—Parte II.

cion, antes de hacer argumentos contra la ley, debe dejar evidenciado; queda Constitucion me permite venir á exponerlos ante un Tribunal.

Dice el art. 126 de esta: "Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella... serán la suprema ley de toda la Union. Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitucion y leyes, á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones ó leyes de los Estados.

De semejante absoluto precepto, se deriva de un modo fuertemente lógico, necesariamente jurídico, la ineficacia de toda ley que á la Constitucion contrarie.

Si bien carecemos de precedentes que nos den la medida del alcance, de ese precepto, que nos hagan comprender la profunda revolucion que en nuestra jurisprudencia causó, y si esa falta de precedentes es tal, que al aprobarse en el congreso constituyente aquel artículo por unanimidad en la sesion de 18 de Noviembre de 1856 (Hist. del Cong. tom. 2º pag. 559) ni siquiera hubo discusion que esta materia alumbrara, todavía tenemos otros recursos para interpretar ese precepto, para seguirlo hasta en sus últimas consecuencias, para apreciar la revolucion que hizo en nuestra jurisprudencia.

Es un hecho puesto fuera de toda duda, que el congreso constituyente quiso dotar á México de unas instituciones iguales á las que rigen aun en los Estados-Unidos, tan iguales, que en muchos de los graves puntos de nuestro derecho constitucional el texto de nuestra ley no es sino la traduccion literal del de la americana: el art. 126 de la constitucion cuyo sentido trató de interpretar no es mas que esa traduccion literal del art. 6º de la Constitucion de los Estados-Unidos que dice así: "Esta Constitucion

y las leyes de los Estados-Unidos que se expidan en observancia de ella, y todos los tratados hechos ó que se hagan bajo la autoridad de los Estados-Unidos, serán la suprema ley de la tierra, y los jueces en cada Estado estarán sujetos á ella, no obstante lo que en contrario disponga la Constitución ó leyes de cada Estado." Si pues nosotros carecemos aun de precedentes jurídicos que la inteligencia de la ley fijen, nos es indispensable recurrir á la legislación de donde ella le tomó, para interpretarla rectamente. El trabajo que en muchos siglos han estado haciendo los comentadores de las leyes civiles vijentes, buscando la explicación de sus preceptos en los textos romanos de donde fueron tomadas, es el que tiene que emprender hoy, buscando en el derecho americano la explicación de muchos de los artículos de nuestra Constitución, quien quiera que desee interpretarlos y aplicarlos con acierto.

Esta poderosa decisiva consideración, y no el prurito inmoderado de la imitación de lo extranjero, me obliga á ocurrir en este caso á los publicistas americanos, y citar sus doctrinas, no como autoridad que nuestro foro respete, sino como la expresión científica, filosófica, de los motivos de nuestra ley de la americana copiada. Hecha esta advertencia, que he juzgado necesaria, voy á extraer de aquellos publicistas las doctrinas que debo aquí invocar.

"El principio admitido en Inglaterra, dice Kent, de que el parlamento es omnipotente, no está aceptado en los Estados-Unidos. . . . En el país en donde una Constitución escrita determina las facultades y los deberes de cada uno de los poderes del gobierno, una ley puede quedar sin efecto, si fuere contraria á la Constitución. Los Tribunales están obligados á confrontar cada ley con el texto de la Constitución. . . . como que esta es la ley suprema con la que todas

las otras deben conformarse. La Constitución es la expresión de la voluntad del pueblo hecha originalmente por él mismo, definiendo las condiciones permanentes de la alianza social: por consiguiente entre nosotros, no se puede dudar que toda ley contraria al espíritu y letra de la Constitución, es absolutamente nula y de ningún valor (*that every act of the legislative power contrary to the Constitution, is absolutely null and void*). Toca al poder judicial determinar si una ley es ó no constitucional. La interpretación, la fijación del sentido de un texto constitucional, es un acto judicial que requiere el ejercicio del poder que tiene á su cargo la interpretación y aplicación de las leyes. Pretender que los Tribunales deban obedecer sin discernimiento todas las leyes, aunque les parezcan contrarias á la Constitución, sería pretender que esa ley fuese superior á la Constitución, y que los jueces no vieran en esta la ley suprema de la tierra. Esto conduciría á reputar mayor el poder del congreso que el del pueblo, y á declarar que el capricho de un congreso. . . . podía destruir todo el edificio del gobierno, y las leyes fundamentales en que él está basado. Las restricciones impuestas al poder legislativo por la Constitución, serían inútiles si otro poder pudiera hacerlas efectivas. . . . El poder judicial, respetable por su independencia, venerable por su sabiduría y gravedad, es el mas á propósito para ejercer el acto de exponer ó interpretar la Constitución y juzgar de la validez de las leyes segun aquellos principios (*and trying the validity of statutes by that standard*). Por el libre ejercicio de este deber, los Tribunales. . . . pueden proteger á cada uno de los departamentos del gobierno, y á cada miembro de la sociedad contra las ilegales y destructoras innovaciones de sus derechos constitucionales."

"Ha llegado por esto á ser un principio indisputable (& settled principle) en este país, que pertenece al poder judicial el deber de declarar *nula y de ningún valor* la ley expedida en violación de la Constitución." Commentaries on American law, vol. 1, números 449 y 450.

Estas teorías en el pueblo vecino, no son meramente especulativas: ellas tienen una vida real y positiva; ellas son aplicadas por los Tribunales, y no una sino muchas ejecutorias las consagra. En gracia del interés de la materia que analizo, me creo aun obligado á extraer las argumentaciones con que la Corte de Justicia de los Estados Unidos, sostuvo esas teorías en un caso por ella decidido en Febrero de 1803.

"La cuestión de si una ley contraria á la Constitución, son estas las palabras de esa ejecutoria, puede ser una verdadera ley, es altamente interesante para los Estados Unidos; pero por fortuna la dificultad de esa cuestión no es igual á su interés. Basta invocar ciertos principios bien establecidos para decidirla."

"La base sobre la que está fundado todo el gobierno americano, es que el pueblo tiene el derecho de darle las instituciones que en su opinion sirvan mejor á su prosperidad. Este derecho no se ejerce ni pudiera hacerse así frecuentemente. Los principios constitucionales establecidos estan por esto reputados fundamentales, y como la autoridad de que proceden es suprema, ellos se tienen tambien como permanentes."

La original y suprema voluntad del pueblo revelada en la Constitución al organizarse el gobierno, asigna á cada uno de sus departamentos, ciertas facultades y les fija ciertos límites.

"Los poderes del legislativo están definidos y limitados, y estos límites no pueden traspasarse. Si así no fuera, para qué serviría que tales limitaciones se

hubieran consignado en la Constitución? Este dilema es apremiante: ó la Constitución prevalece sobre toda ley contraria á ella, ó el poder legislativo puede alterar la misma Constitución por un acto ordinario, por una ley comun. Entre esos extremos no hay medio: ó la Constitución es la ley suprema, que no puede ser derogada ni modificada por los medios ordinarios legislativos, ó ella está al nivel de todas las leyes, que pueden ser derogadas por el congreso, siempre que el lo quiera."

"Si lo primero es lo cierto, entonces la ley contraria á la Constitución no es ley; pero si lo segundo lo fuese, habria necesidad de decir que la Constitución no es mas que la loca tentativa del pueblo que quiso limitar un poder que no habia de tener límites."

"Los pueblos regidos por Constituciones escritas, reputan á estas la ley suprema y fundamental, y la teoría en tales gobiernos admitida, es que una ley contraria á la Constitución no puede producir efectos. . . . Esta Corte considera á esa teoría como uno de los principios fundamentales de nuestra sociedad? . . .

"Y si una ley contraria á la Constitución no produce efecto, ¿puede ella á pesar de no ser válida, obligar á los Tribunales? En otros términos: á pesar de que ella no es ley ¿debe ser aplicada como si lo fuera? Esto seria destruir en la práctica lo que en teoría se acepta? . .

"Cae bajo la competencia del poder judicial interpretar las leyes para aplicarlas á los casos que ocurren. . . . Si dos leyes están en conflicto toca á los Tribunales decidir cual es la vigente."

"Si una ley estuviera en oposición con la Constitución, y si en un caso debiera aplicarse ó la Constitución ó esa ley, de tal modo que la Corte hubiera de decidir semejante caso ó conforme á esta ley no considerando la Constitución, ó conforme á la Constitución sin tomar en cuenta la ley, la Corte antes debe resol-



ver cual de esos dos preceptos contradictorios se debe obedecer. Esto compete esencialmente al poder judicial."

"Por tanto, si los Tribunales tienen que respetar la Constitucion, y si esta es la suprema ley, superior á cualquiera otra secundaria, la Constitucion y no la ley secundaria debe aplicarse al caso en cuestion."

"Los que ponen en duda esta teoria están por necesidad obligados á negar que la Constitucion sea la suprema ley, á sostener que los tribunales no deben respetarla. Y esto destruiria el fundamento de toda Constitucion escrita, declararia que una ley que según los principios de nuestro gobierno, carece de todo efecto, es sin embargo en la práctica completamente obligatoria: declararia que si el legislativo hace lo que le está expresamente prohibido, sus actos, á pesar de todo, deben ser válidos en la práctica: esto daria al legislativo una real y positiva omnipotencia, cuando la Constitucion limita sus poderes: esto seria asignar ciertos límites, y declarar que ellos pueden traspasarse á voluntad de la autoridad á quien se imponen."

"Sostener que los Tribunales federales que deben juzgar segun la Constitucion, no deben observarla..... es una extravagancia que no puede defenderse."

"En ciertos casos, la Constitucion habla especialmente á los jueces..... por ejemplo, esta ha declarado que "ningun derecho se podrá imponer sobre las exportaciones de cada Estado." Supóngase que tal derecho se establece sobre la exportacion del algodón, del tabaco, de la harina, y que se entabla sobre esto un juicio.....¿deberian los jueces apartar la vista de la Constitucion para no ver mas que la ley?"

"La Constitucion manda que no se expida ninguna ley *ex post facto*. Pero sin embargo de todo se expide, y una persona es enjuiciada segun ella. ¿Po-

dria esta Corte condenar á aquellos á quienes la Constitucion defiende?.....

¿Qué significa el juramento de obedecer y guardar la Constitucion que presentan los jueces, si su deber fuera violar lo que ellos juran guardar?"

Esto seria verdaderamente inmoral..

¿A qué jurar un juez cumplir sus deberes segun la Constitucion, si ella no ha de ser la norma de sus actos, si ha de ser el ciego cómplice de la violacion que de ella haga el legislativo? Si esto hubiera de ser así, la Constitucion seria una solemne burla (*solemn mockery*.)"

"Son de tal modo aplicables, continúa el Sr. Vallarta, esas teorías á nuestro derecho constitucional, que bien se puede tenerlas como su racional y filosófica exposicion: abstraccion hecha del nombre de los publicistas americanos, sus razonamientos son tan apremiantes, que aceptado el texto del art. 126 de nuestra Constitucion, es necesario llegar hasta las consecuencias que ellos sostienen: la ley es igual aquí y en los Estados Unidos; su filosofía, su inteligencia, debe en ambos países ser la misma; la autoridad científica de los textos que he citado, es irrecusable entre nosotros."

El respetable letrado que así se expresa expone en pro de la Constitucion otras muchas razones incontestables como las anteriores, que por no ser difuso y por la claridad del asunto se dispensa el infrascrito de copiar aquí, considerando bastante para su propósito lo que acaba de trascribir.

No hay lugar á vacilaciones, ciudadano juez, porque no puede ser mas palpante la inconstitucionalidad de la ley de 23 de Mayo, como al principio lo demostré, y mas inevitable la obligacion de observar y aplicar el texto constitucional, suprema voluntad del pueblo, ley sobre todas leyes, que como base de nuestra organizacion política, daria lugar con su caída al derrumbamiento

completo del sistema democrático que nos rige, sobre cuyas minas se levantaría un trono á la mas escandalosa y revuelta oligarquía, haciendo al pueblo mexicano la miserable burla y escarnio del mundo entero, *(y despues la presa)*. La cuestion, ciudadano juez, no puede ser de mas vital importancia: de su resolución depende la vida ó la muerte de nueve hombres, cuya pérdida acarrearía la ruina y la desolacion de sus atribuladas familias: de su resolución se aguarda un fallo que venga á rendir un homenaje de la mas alta justicia á la soberanía del pueblo ó un fallo que burlesque la soberanía declarándola irrisoria y fantástica, y que arroje la mas sacrílega y monstruosa irreverencia al Hacedor Supremo, en cuyo nombre se ha decretado por el congreso constituyente en representación de la República Mexicana, la ley fundamental de cuya inviolabilidad ó derogacion se trata.

Por tanto, el Promotor concluye pidiendo á la Justicia Federal amparo á los reos Juan Ramirez y socios contra la providencia y ley que lo solicitan.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 23 de 1872.—*José María Ballesteros.*

Es copia de su original que obra en el juicio respectivo, á que me remito.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 23 de 1872.—*José María Ballesteros.*

#### SENTENCIA del O. juez de Distrito.

Oaxaca de Juarez, Diciembre 31 de 1872.—Visto el presente juicio promovido por los reos Juan Ramirez, Estéban y José María Hernandez, Pablo Mendoza, José Cristóbal, Florentino Canton, Francisco Vazquez, Casimiro y Macario Santos, solicitando amparo contra la providencia del O. Gefe político del Distrito de Villa Alvarez, que les condenó á la última pena, por haber asaltado y ro-

bado la casa del O. Nicolás Mendez, en la hacienda de Mejía; visto el informe de la autoridad ejecutora del acto reclamado; lo pedido por el O. Promotor Fiscal; el auto en que se mandó suspender la ejecucion de la pena impuesta, y todo lo demas que ver convino; considerando: que el O. Gefe político, al aplicar la pena á los quejosos, solo tuvo presente la ley de 23 de Mayo último y sus correlativas, sin tener en cuenta la excepcion que establece el art. 29 de la Constitucion General. Considerando: que en concurrencia de dos leyes la una fundamental y la otra secundaria, que tienen relacion á un mismo caso, como el presente, ha debido preferirse la primera, como para fijar el derecho público, lo establece el art. 28 de la ley de 20 de Enero de 1869. Considerando: que si bien es cierto que el art. 29 de la Constitucion General permite suspender las garantías individuales, lo es tambien, que el mismo artículo exceptúa las que se refieren á la vida del hombre. Y teniéndose presentes las razones que el O. Promotor fiscal consigna en su alegato, el art. 29 de la Constitucion, el 28 de la ley de 20 de Enero de 1869 ya citado. La Justicia Federal ampara y protege á los reos Juan Ramirez, Estéban y José María Hernandez, Pablo Mendoza, José Cristóbal, Florentino Canton, Francisco Vazquez, Casimiro y Macario Santos, contra la resolución del O. Gefe Político de Villa Alvarez, que les condenó á muerte, por los delitos de asalto y robo en la casa del O. Nicolás Mendez, de la hacienda de Mejía, por haber violado la garantía del art. 29 de la Constitucion General. Hágase saber; sáquense las copias certificadas para publicacion de este fallo en el "Semanario Judicial" y "Diario Oficial," y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El O. Lic. Joaquin Mauleon, juez de Distrito de este Estado, así defi-

nitivamente juzgando lo decretó y firmó por ante mí el secretario, de que doy fé.

—*Joaquín Mautleón.*—*Rodolfo Sandoval.*

Es copia de su original que certifico. Oaxaca de Juárez, Enero 8 de 1873.—*Rodolfo Sandoval*, secretario.

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 10 de 1873.—Visto el recurso de amparo que en 22 de Octubre próximo pasado, promovieron ante el juez de Distrito del Estado de Oaxaca, Juan Ramirez, Estéban y José María Hernandez, Pablo Mendoza, José Cristóbal, Florentino Canton, Francisco Vazquez, Casimiro y Macario Santos, presos en la cárcel de Villa Alvarez, como reos de asalto y robo de una casa de la hacienda llamada de Mejía, contra la determinacion del Gefe político de la misma Villa, por cuya determinacion han sido condenados á muerte, aplicándoseles la ley de 23 de Mayo del año anterior de 1872, y contra esta ley, por cuanto á que alegan los quejosos, que con aquella condenacion y esa ley se han violado en sus personas las garantías que les concede el art. 23 de la Constitucion Federal, pues dicen: que si en virtud de este, puede penarse con la muerte á los salteadores de camino, no siendo los promoyentes salteadores de camino, sino de una casa en poblado, no es de aplicárseles la pena de muerte, y la aplicacion de esta por la autoridad política y la ley en virtud de la cual se aplicó, salen de la prevencion constitucional y determinan la violacion reclamada, sin que se pueda alegar que la garantía que señalan esté suspensa, porque no es de suspenderse, segun el art. 29 de la propia Constitucion, afectando la vida del hombre. Visto el informe del Gefe político de Villa Alvarez, ex-

poniendo: que los reos Juan Ramirez y socios, promoyentes del recurso, que se tiene á la vista, convictos y confesos de haber asaltado la hacienda de Mejía, atacando á sus moradores, robándoles y atormentándoles cruelmente, han sido juzgados y sentenciados á la pena capital con arreglo á la ley citada de 23 de Mayo y sus correlativas, excusándose de no entrar en la discusion de si esta ley es anticonstitucional, porque afirma el exponente que solo es ejecutor de ella. Vistas las demas constancias y cuanto mas fué conveniente.

Considerando: 1º Que la ley de 23 de Mayo de 1872, atentó el espíritu del art. 23 de la Constitucion Federal, relativamente á los salteadores, no ha hecho mas que fijar la inteligencia de este artículo, supuesto que ese espíritu es poner á cubierto de los ataques de aquellos criminales, á los lugares que no siendo poblaciones, en que es eficaz la defensa, están las personas expuestas al robo con asalto, como ha sucedido en el caso presente, en que, segun las constancias de autos, los quejosos, en cuadrilla asaltaron, atormentaron y robaron á los habitantes de la hacienda de Mejía.

2º: Que en virtud de la consideracion anterior, habiendo sido juzgados dichos quejosos como salteadores, con las circunstancias agravantes indicadas, se encuentran dentro de la prevencion de la ley de 23 de Mayo, sin faltarle á los preceptos constitucionales que invocan, y el Gefe político que los juzgó segun ella, ha obrado en la órbita de sus atribuciones no verificando en consecuencia la violacion reclamada. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se resuelve lo siguiente: 1º Se revoca la sentencia que en 31 de Diciembre último, pronunció en Oaxaca el juez de Distrito del Estado del mismo nombre, declarando: que la Justicia Federal ampara y protege á los reos Juan Ramirez, Esté-



ban y José Hernandez, Pablo Mendoza, José Cristóbal, Florentino Canton, Francisco Vazquez, Casimiro y Macario Santos, contra la resolución del C. Gefe político de Villa Álvarez, que los condenó á muerte por los delitos de asalto y robo, en la casa del C. Nicolás Méndez, de la hacienda de Mejía, por haber violado la garantía del art. 29 de la Constitución general. 29 La Justicia de la Unión no amparará ni protege á los mencionados reos, ni contra la resolución referida del Gefe político de Villa Álvarez, ni contra la ley de 23 de Mayo, repetida, por la que fueron juzgados, por no haber garantía individual violada.

Devuélvanse las actuaciones al juez de Distrito que las elevó, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 14 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Tamaulipas, por el C. Leonardo Pérez, á nombre de su hermano Luciano Pérez, contra el Presidente municipal de Altamira, que consignó á Luciano al servicio de las armas.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El fiscal dice: que Leonardo Pérez, á

nombre de su hermano Luciano, pide á vd. amparo, contra la providencia que tomó el C. Presidente del Ayuntamiento de Altamira, consignando á dicho Luciano al servicio de las armas. Se llamó á este para que dijera si ratificaba el escrito que presentó Leonardo, y lo ratificó. Se requirió al ciudadano comandante militar de esta plaza, para que no diera de alta al repetido Luciano, entre tanto que concluía este juicio, y contestó que ya había sido *pasado por cajas*. Se pidió informe á la autoridad de Altamira, y contestó mandando varias declaraciones tomadas ante aquél Juzgado, por las cuales aparece que el solicitante es ladrón de bestias.

El fiscal está porque se castigue rigurosamente el abigeato; pero en el caso presente ni puede llamarse castigo á esa consignación al servicio de las armas, ni se ha aplicado como debia aplicarse; previa sentencia formal. Además, el art. 185 de la ley de procedimientos del Estado, previene que "ningun reo sentenciado por ladrón pueda ser destinado al servicio de las armas." Luciano Pérez, en primer lugar, no ha sido sentenciado, como antes se dijo, y en segundo lugar, suponiendo que lo hubiese sido, no podría serlo destinándolo á la milicia.

Así es, que ha habido por parte de la autoridad de Altamira violación flagrante de una ley del Estado, y con ella, violación de varias de las garantías individuales, reconocidas por la Constitución general.

Por lo cual, el fiscal pide á vd., conceda á Luciano Pérez el amparo que ha solicitado, expresando en su sentencia, si lo creyere conveniente, que él no importa juicio ninguno sobre los delitos que haya cometido el solicitante, por los que, debe quedar sujeto á la autoridad local respectiva.

Tampico, Octubre 12 de 1872.—*Lic. Modesto Ortiz*.